

Subdesarrollo y movimiento obrero. Una reflexión sobre los límites del socialismo boliviano (1940-1964)

Enrique Ibáñez Rojo

INTRODUCCIÓN

En general, la historiografía latinoamericana del siglo xx ha concedido muy raras veces a las organizaciones del movimiento obrero el papel decisivo que seguramente han desempeñado en la evolución social y política de la región.¹ Sin embargo, en Bolivia, la cuna de los trabajadores “más combativos y políticamente conscientes de toda América Latina”,² la importancia de sus luchas en la trayectoria histórica del país ha sido siempre ampliamente reconocida. Tanto, que el más original y conspicuo de los sociólogos bolivianos llegó a reducir toda la dinámica política contemporánea de su patria a una confrontación titánica y desigual entre los sindicatos y el ejército: “No es una exageración decir que, al menos desde 1940, la historia de Bolivia es un duelo entre los militares y la clase obrera”.³

En el presente artículo intentaré resumir las variables estructurales y los desarrollos históricos que creo permiten explicar tanto el excepcional poderío del movimiento obrero boliviano como uno de los rasgos más llamativos de su herencia institucional: su radicalismo reivindicativo, que se ha confundido demasiadas veces con una hipotética “conciencia política” socialista. Mantendré que la ausencia de desarrollo industrial y de cualquier diversificación significativa del sector exportador hizo que el movimiento obrero boliviano se consolidara necesariamente, en una medida que no tiene equivalente en ningún otro lugar, como un movimiento *minero*, y que de este hecho se derivaron *tanto su fuerza histórica como su peculiar radicalismo*.

Durante mucho tiempo las comunidades mineras, que ofrecían una base excepcionalmente sólida a la acción colectiva de protesta,

¹ Véase Ch. BERGQUIST: *Los trabajadores en la historia latinoamericana*, Siglo XXI, Bogotá, 1988, p. 25.

² J. STRENGERS: *La Asamblea Popular. Bolivia, 1971*, SIDIS, La Paz, 1991, p. 11.

³ R. ZAVALA: “Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia”, en R. ZAVALA (comp.): *Bolivia hoy*, Siglo XXI, México, 1983, p. 222.

ocuparon el lugar estratégico de una economía incapaz de superar su *confinamiento* monoexportador. De ahí, argumentaré, la llamativa *centralidad obrera* que recorre la historia contemporánea de Bolivia. Aquellos mineros fueron aprendiendo a su pesar, en las rondas sucesivas del juego socio-político, que *la mezquindad del excedente* que producían con su esfuerzo era una realidad brutal que aplastaba sin remedio a las mejores intenciones reformistas. El país era demasiado pobre. De modo que si probablemente no fueron ganados por el marxismo revolucionario, sí creyeron aprender que estaban implicados en un juego de conflicto puro con las elites estatales que pretendían “desarrollarlo” contando sólo con los magros beneficios de la minería como recurso interno de inversión. *De ahí el radicalismo* desesperado de sus luchas.

Confinamiento de la economía en un sector minero sometido a una crisis secular de productividad. Estrategias de conflicto puro en una pugna distributiva en la que lo que parecía estar en juego era la propia supervivencia. Éstas son las claves que permiten entender las razones, pero también los límites de la “centralidad obrera” y el socialismo en el país más pobre de América del Sur. Porque en ningún momento existieron las bases para ese “masivo movimiento político por el socialismo” que muchos intelectuales de izquierda quisieron ver en las *agónicas y solitarias* luchas de los mineros del Altiplano.⁴ De modo que no hay nada que añorar en esa historia.

LOS MINEROS

La emergencia de la protesta obrera en Bolivia fue bastante tardía dentro del contexto latinoamericano, y ello debe explicarse sin duda por el escaso desarrollo urbano-comercial y la inexistencia de una planta industrial mínima durante las primeras décadas del siglo XX. Estas mismas características peculiares que retardaron el surgimiento de manifestaciones significativas de protesta obrera dieron una enorme gravitación a las luchas de los trabajadores del “enclave” minero. Los mineros nunca llegaron a constituir el 6% de la población activa masculina de Bolivia, pero fueron la fracción mayoritaria de su raquítica clase obrera, y desde luego el único grupo concentrado en unidades de producción grandes y “modernas”.

Sometidos a unas condiciones de vida y trabajo de una dureza legendaria, los trabajadores del subsuelo boliviano han tenido siempre un enorme caudal de *motivos de queja*.⁵ Nunca les han falta-

⁴ J. DUNKERLEY: *Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952-1982*, Quipus, La Paz, 1987, p. 287.

⁵ Allí, en los que Sergio ALMARAZ (*Réquiem por una república*, Los Amigos del Libro, La Paz/Cochabamba, p. 59) describió una vez como “cementeros mineros”, el 75% de los niños moría antes de cumplir los diez años, la mayoría de tuberculosis... ¡en 1964! (G. M. MARTIN: *The Bolivian Mineworkers Federation (FSTMB), 1952-1965: Labour, Politics and Economic Development*, Phd. Diss., Universidad de Porthmouth, 1984, p. 228). Cuatro años antes del estallido revolucionario de abril de 1952, un 97,48% de los trabajadores del mayor centro estañífero del país padecían algún grado de infección tuberculosa (G. LORA: *Historia del movimiento obrero boliviano, 1933-1952*, Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba, 1980, p. 324). El médico jefe del Hospital Central de Oruro descubrió por su parte, en 1954, que la edad promedio de los enfermos de silicosis en tercer grado era de 32 años, con una media de 4,5 años de trabajo en interior mina (J. DUNKERLEY: *Rebelión en las venas*, p. 26). En las modernas empresas de los “barones” del estaño sólo usaba guardatojo -casco- el 30 por ciento de los obreros de interior mina, y no se empleaba ninguna otra ropa especial de trabajo. La subalimentación era un fenómeno generalizado en todos los campamentos, donde por lo demás los niveles salariales eran ínfimos, no existía salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas no se respetaba nunca (Informaciones de la Comisión Magruder, de 1943. Véase G. LORA: *Historia del movimiento obrero boliviano*, p. 347). Aquellas durísimas condiciones de vida aportarán un constante caudal de motivos de queja a las movilizaciones mineras a lo largo de toda la historia contemporánea del país, ya que a pesar de la nacionalización de las grandes compañías del estaño y al extraordinario desarrollo del sindicalismo minero tras el acontecimiento revolucionario de 1952, las condiciones de trabajo en las minas de Bolivia seguirían estando entre las peores del mundo. Todavía en marzo de 1983 la Federación sindical del sector recordaba que el porcentaje de enfermedades laborales alcanzaba allí al 24%, frente a un 4% registrado en Perú: uno de cada cuatro mineros estaba afectado por una enfermedad profesional; el índice de accidentalidad arrojaba también cifras siniestras: de cada cinco trabajadores de la corporación minera estatal, uno terminaba sufriendo algún tipo de lesión o accidente en el socavón

do razones para el resentimiento a los mineros de Bolivia; para sentir que el país vivía en verdad de su miseria, de su muerte cotidiana. Pero como el país vivía *realmente* de ellos, también tuvieron durante décadas un gran *poder de negociación en la arena económica*, dada la importancia estratégica de la industria que los empleaba: un poder mucho mayor, sin duda, que el de los trabajadores de cualquier “enclave” de exportación en los países vecinos, relativamente industrializados y/o con una estructura exportadora más variable o diversificada. Hasta los años setenta, en efecto, los minerales (fundamentalmente el estaño) aportaron regularmente en torno al 90% de los ingresos por exportaciones de Bolivia. De modo que si los mineros de Bolivia tenían sobrados motivos para estar insatisfechos con lo que recibían a cambio de su esfuerzo, cuando lucharan para pedir más podían hacer mucho daño. Y, finalmente, la *estructura comunitaria* de los campamentos, que ofrecía una base muy sólida para la acción colectiva de protesta, garantizaba que, tarde o temprano, lo harían: que los mineros de Bolivia lucharían “como un solo hombre” para defender sus intereses por grandes que fuesen los riesgos o los sacrificios de la lucha. Veamos.

En los campamentos mineros la dependencia absoluta de las empresas (nacionalizadas después de 1952) para el abastecimiento tanto de viandas a través de la “pulpería”, como de luz, agua y todos los servicios básicos, que favoreció inicialmente el arraigo de ideologías paternalistas, tendió a la postre a reforzar el sentimiento de *pertenencia al colectivo*: todas las características definitorias del entorno laboral minero contribuían, en efecto, a dotar al grupo de una identidad *unívoca*. Además, el minero boliviano carecía tanto de opciones de empleo alternativas como de cualquier expectativa de movilidad individual. Las habilidades que hubiera adquirido en el socavón no le servirían en ninguna otra parte, dado el raquitismo de la industria nacional; y su organismo, habituado a la vida en la altiplanicie andina, difícilmente podría acostumbrarse a las condiciones del llano oriental o de los valles subtropicales, donde se encontraban las únicas tierras disponibles para la colonización. De modo que su capacidad de supervivencia dependía casi por completo de su empleo en la mina, y sus posibilidades de mejorar su situación de la suerte del colectivo. Finalmente, su radical *diferenciación étnica y cultural* frente a los patronos facilitó también el surgimiento de una identidad colectiva sólida. Porque aunque en la economía de “enclave” boliviana, al contrario de la tendencia general verificada en América Latina, las altas exigencias de capital *no* llevaron al control de los medios de producción por grupos de capitalistas extranjeros,⁶ los gerentes que representaban a las grandes familias de propietarios en el lugar de trabajo eran casi siempre extranjeros, o, en el mejor de los casos, criollos urbanos que desconocían o despreciaban las tradiciones y la cultura locales.

o en el ingenio (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, *Proyecto para la Cogestión en la Corporación Minera de Bolivia*, La Paz, 1983, p. 5). Pero también a comienzos de los años 80 la tuberculosis afectaba todavía al 40% de la población en algunos campamentos –Telamayu–, cada día se registraba la muerte de un minero a causa de la silicosis, la esperanza de vida era 10 años menor que la media nacional en las zonas mineras, la mortalidad infantil era del 176 por mil para los varones, y el consumo de calorías cerca de tres veces menor que el recomendado por el Ministerio de Salud. Y desde 1985 hasta el día de hoy, en una década que ha presenciado el hundimiento de la gran minería estatal y la multiplicación de cooperativas supervivencia en las que la auto-explotación llega a unos límites difícilmente imaginables, la situación, aunque parezca imposible, ha vuelto a empeorar.

⁶ “El caso más general de formación de enclaves en las economías latinoamericanas expresa un proceso en el cual los sectores económicos controlados nacionalmente, por su incapacidad para reaccionar y competir en la producción de mercancías que exigían condiciones técnicas, sistemas de comercialización y capitales de gran importancia fueron paulatinamente desplazados” (F. H. CARDOSO y E. FALETTO: *Dependencia y desarrollo en América Latina*, Siglo XXI, México, 1987 [1969], p. 48). En Bolivia, debido a las elevadas exigencias de capital para la explotación y el transporte del estaño se llegó efectivamente a una enorme concentración de la propiedad, pero ésta quedó en manos de capitalistas locales que supieron aprovechar sus influencias y su mejor conocimiento de la situación para absorber a sus competidores chilenos e ingleses. Un episodio muy conocido de este proceso es la compra por Patiño de la empresa chilena “Llallagua”, que por entonces era la mayor compañía minera de Bolivia. Véase para esto R. QUEREJAZU: *Llallagua*, Los Amigos del Libro, Cochabamba, 1978, pp. 135 y ss.

Pero en términos generales incluso la descripción más prolija de las características del entorno laboral de los campamentos podría resumirse y *formalizarse* en una afirmación muy sencilla: los mineros de Bolivia se hallaban insertos en una *situación comunitaria*. Entiendo aquí el término “comunidad”, siguiendo a Calhoun, como una variable que mide el grado en que los individuos están ligados unos a otros por *relaciones sociales directas*, de modo que referirse a “una comunidad” es simplemente señalar a una población caracterizada por una extensión considerable de este tipo de vínculos.⁷ Y es evidente que en el estrecho mundo de los campamentos, la férrea ligazón y la dependencia de los mineros de la suerte del grupo relativamente reducido y enormemente “cerrado” de compañeros que compartían su mismo trabajo, produjo un grado muy elevado de integración comunitaria, permitiendo la consolidación (como demostró el prolongado trabajo de campo de June Nash en una de las mayores minas de Oruro) de un sistema de “obligaciones explícitas, socialmente sancionadas, fijadas en afiliaciones primarias de grupo” capaz de promover la *cooperación* de los miembros con las mismas técnicas características estudiadas por los antropólogos en “otras comunidades rurales no occidentales”.⁸

Lo importante es entender que en una situación comunitaria para *cualquier* individuo resulta *racional* participar en toda acción colectiva que emprenda el grupo, dado que éste tiene a su disposición un conjunto de sanciones sociales informales que puede ejercer contra los miembros remisos con una gran efectividad.⁹ La reprobación (el aislamiento del no cooperador, que en la comunidad cerrada equivale a una muerte social) del grupo de compañeros será un incentivo suficiente para que todos (incluso los más cobardes, o los más egoístas) participen las luchas del colectivo. La comunidad, cuando se mueve, actúa *siempre* “como un solo hombre”, *con independencia de las motivaciones*, los valores o el “nivel de conciencia” que puedan o quieran atribuirse en cada caso a sus miembros.

LA TENTACIÓN “CULTURALISTA”

Pero como hablamos de mineros *bolivianos* podemos ir todavía más allá, argumentando (y éste es el tema central en el estudio antropológico de Nash) que en su caso existían ya en gran medida tanto un universo compartido de *valores* previo al ingreso en la mina, como una fuerte *tradición cooperativa* derivada de la procedencia mayoritariamente campesina de unos trabajadores que heredaron las *normas de reciprocidad* arraigadas en la experiencia ancestral del cultivador del Ande. Y resultaría insensato despreciar la hipótesis de que las tradiciones organizativas y solidarias prehispánicas tuvieron una cierta importancia en el desarrollo inicial de los sindicatos en las minas, por mucho que (debido al escaso crecimiento, y aun disminución a partir del máximo alcanzado en los años cuarenta, del contingente de obreros empleado en las minas) los trabajadores fueron cada vez más “mineros hijos de mineros”. Es muy probable, en efecto, que la presencia de todo un conjunto de elementos culturales andinos contribuyese incluso durante un tiempo prolongado¹⁰ a dotar a los

⁷ Véase C. J. CALHOUN: “Radicalism of tradition and the question of class struggle”, en M. TAYLOR (ed.): *Rationality and Revolution*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, pp. 148-149. El problema de cómo definir a las “comunidades” en tanto que instituciones específicas con tareas y metas específicas, que genera hoy debates entre los antropólogos que estudian un mundo andino cada día más heterogéneo, no afecta en nada a la definición. Para esto último véase H. MOSSBRUCKER: *La economía campesina y el concepto de “comunidad”: un enfoque crítico*, IEP, Lima, 1990.

⁸ J. NASH: *We Eat the Mines and the Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines*, Columbia University Press, Nueva York, 1979, p. 76.

⁹ M. TAYLOR: “Racionalidad y acción colectiva revolucionaria”, *Zona Abierta*, 54/55, 1990, pp. 69-113.

¹⁰ Es el caso del culto al Tío de la mina (Supay). June Nash, en su original estudio antropológico sobre los mineros de San José, destaca cómo especialmente después de la toma militar de las minas, cuando la “challa” del Tío fue suprimida junto con los sindicatos y el control obrero, el ritual, que continuó realizándose clandestinamente, se convirtió además en

trabajadores de una identidad colectiva sólida y de una base aprovechable para la creación de redes organizativas en el nuevo contexto laboral. Pero entre reconocer esto y dejarse arrastrar por la tentación culturalista, que pretende explicar las pautas básicas y el sentido de las movilizaciones ulteriores de los mineros apelando a la herencia cultural del Ande, media ciertamente un abismo.

Puede que los argumentos “antropológicos” arrojen alguna luz sobre el período que abarca el siglo XIX y las primeras décadas del XX, cuando las luchas mineras se realizaron ante todo contra las sucesivas ofensivas empresariales para extender la racionalidad capitalista en la práctica productiva a costa de las normas de la reciprocidad andina.¹¹ Sin embargo, tras el tránsito de los años 30 y 40 del presente siglo, en los momentos en que se desarrollaron las primeras organizaciones propiamente proletarias en las minas, los temas de las reivindicaciones y los móviles de la acción colectiva fueron cambiando rápidamente,¹² y las tradiciones ancestrales (andinas o no) fueron pesando cada vez menos a medida que los mineros iban insertándose por completo en relaciones de producción netamente capitalistas y encaminaban sus esfuerzos a *mejorar su situación dentro del nuevo sistema*.

Es posible que la herencia cultural precapitalista siguiera cumpliendo un papel importante en la generación de solidaridades en el proletariado minero.¹³ Pero es absolutamente necesario destacar, contra una tradición antropológica que ha ganado mucha influencia en los últimos años, la *ruptura* radical que se produjo en el sentido de la acción colectiva de los trabajadores. A partir de la crisis de entreguerras, en efecto, la movilización obrera tendrá un carácter crecientemente *proactivo*:¹⁴ no reaccionará frente a las amenazas a la tradición, sino que mirará hacia el futuro, buscando

la mejor ocasión para discutir los problemas y las luchas de los trabajadores. En general, según Nash, “la resistencia a la represión militar por las mujeres y los hombres de la comunidad minera se alimentó de estas fuentes profundas de identidad cultural que les proporcionaron una orientación y la voluntad de sobrevivir cuando reconocieron el poder genocida del régimen de Barrientos”. J. NASH: *We Eat the Mines and the Mines Eat Us*, p. 318. La importancia de esta herencia cultural común para la generación de solidaridades se vio seguramente reforzada, como anoté arriba, por la radical “otredad” de los gerentes y técnicos extranjeros que dirigían las empresas.

¹¹ Véase G. RODRÍGUEZ: *El socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los trabajadores mineros*, ILDIS, La Paz, 1991. La resistencia de los mineros adquirió muchas formas en aquella etapa. Sus motivaciones estuvieron seguramente enraizadas en la defensa de las tradiciones andinas y de todo un conjunto de “derechos adquiridos” amenazados por la nueva “racionalidad” capitalista, y el radicalismo y la desesperación de muchas de las acciones que se emprendieron entonces debería atribuirse a la incompatibilidad absoluta entre el modo de vida que pretendían mantener los mineros y los planes empresariales de modernización.

¹² Rodríguez destaca cómo el ciclo de protesta que se desarrolló en los campamentos mineros en 1938-39 reflejó claramente las transformaciones que se estaban produciendo en la acción colectiva minera. Junto a las reacciones violentas contra las agresiones de la empresa, que adquirieron la forma tradicional de los motines espontáneos, se dio una creciente institucionalización del conflicto, canalizándose las demandas a través de organizaciones sindicales que las negociaban con la empresa. Sin embargo, Rodríguez intenta ver todavía en los sucesos de Catavi en diciembre de 1942 aquella “economía moral de la multitud” de que hablara Thompson. Se trataría nuevamente, según el autor, de la quiebra por parte de la empresa de las *reglas tradicionales de reciprocidad* que exigían que en épocas de “boya” (auge) se procediese a una redistribución de los beneficios. Es posible que fuera ése el motivo, pero también se puede pensar que los trabajadores simplemente intentaron aprovechar la oportunidad creada por la buena situación de la empresa para mejorar su nivel de vida a través del aumento salarial. Parece evidente, en cualquier caso, que las reacciones en defensa de tradiciones culturales y pautas precapitalistas de uso del tiempo fueron a partir de la década de los treinta cada vez más marginales como motivaciones de la acción colectiva minera. Véase *El socavón y el sindicato, op. cit.*, pp. 81-89 y 110-115.

¹³ June Nash (*We Eat the Mines...*) ha argumentado convincentemente sobre este punto. Sin embargo, la dirección de la acción colectiva minera será radicalmente otra, y conviene dejar bien claro este punto frente a la tendencia a interpretar las luchas de los sindicatos en una clave “antropologista” que tiende a privilegiar la actuación constante de elementos de las tradiciones y la psicología andinas. La misma Nash, sin embargo, no ha podido establecer mayor relación entre las luchas mineras contemporáneas y las tradiciones y rituales andinos que la coincidencia de las fechas de algunos hitos de la historia del sindicalismo minero con celebraciones religiosas tradicionales. Véase J. NASH: “Religión, rebelión y conciencia de clase en las comunidades mineras del estaño en Bolivia”, *Allpanchis*, XXII 26, 1985, pp. 115-135.

¹⁴ El término, por supuesto, está tomado de Ch. TILLY: *From Mobilization to Revolution*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1978.



la consecución de nuevos derechos y de un mejor nivel de vida. Y así, desde la emergencia de las organizaciones sindicales de las minas en los años cuarenta, *el movimiento obrero boliviano será un actor social formidable y definitivamente minero, pero no "andino"*.

En adelante, el poder del movimiento obrero emanará de la situación estratégica de la industria minera y de la inserción de sus trabajadores en *entornos comunitarios* que ofrecerán siempre una base excepcionalmente sólida para la acción colectiva de protesta. Una base absolutamente independiente de la fuerza (decreciente sin duda con el paso del tiempo) de las viejas tradiciones solidarias del Ande. En adelante, serán sus sucesivas *estructuras de oportunidades*, derivadas de los avatares del *modelo de acumulación* y de las alternativas de las luchas en la *arena política* nacional, lo que determine la evolución de la acción colectiva minera. Unas estructuras de oportunidades que actuarán desde entonces como un *filtro*, seleccionando progresivamente las estrategias y las características de las organizaciones que los trabajadores del subsuelo irían empleando para promover sus *nuevas* reivindicaciones. Resulta simplemente imposible explicar, por ejemplo, el persistente *radicalismo* de los mineros de Bolivia apelando a la incompatibilidad absoluta entre el universo de valores andino y el capitalista/occidental. La trayectoria del movimiento obrero boliviano es bastante más compleja, y los estudios sobre la herencia cultural andina pueden hacer muy poco para iluminarla. Las páginas que siguen están dedicadas a intentar ordenar los momentos centrales de aquella historia y a discutir sus problemas más relevantes.

EL SUICIDIO DEL PARTIDO OBRERO

Hasta la década de los años 1930 los trabajadores de las grandes minas del estaño estuvieron sometidos a una presión asfixiante por parte de sus patronos (los "barones" del estaño) y de los aparatos coactivos del Estado oligárquico, que impidió cualquier desarrollo organizativo estable.¹⁵ Sólo cuando las perturbaciones de la Gran Depresión y la cruenta derrota boliviana en las tierras del Chaco (1932-36)¹⁶ provocaron la crisis terminal del viejo orden, impulsando la entrada en la escena de una nueva generación de militares "nacionalistas" y políticos de clase media, pudieron los mineros romper su aislamiento secular, y sus organizaciones comenzaron a irrumpir con fuerza en la historia de Bolivia. De la traumática experiencia de las trincheras del Chaco surgió, en efecto, una nutrida elite que se declaraba en abierta oposición al viejo orden oligárquico, y que no tardó en darse cuenta de que el descontento obrero era un formidable recurso político, potencialmente movilizable para decantar a su favor el resultado de la confrontación con los grupos de poder tradicionales.

¹⁵ Los pocos trabajos que se han ocupado de bucear en los orígenes del sindicalismo minero boliviano –véase, ante todo, G. RODRÍGUEZ: *El socavón y el sindicato*– describen, en efecto, un panorama en el que la represión brutal de las acciones reivindicativas que comenzaban a ensayar los trabajadores se combinaba con la creación de asociaciones mutualistas promovidas por unos patronos que se negaban a reconocer cualquier conato de organización independiente. Las elites políticas reformistas que llegaron al poder en la década de los 20 mantuvieron una actitud más abierta hacia los sindicatos, pero el relativo estatal se limitó a las débiles organizaciones de los trabajadores urbanos. El Estado oligárquico careció por completo de autonomía frente a los intereses de los grandes "barones" del estaño, y la "masacre" de la mina de Uncía (el primero de los grandes baños de sangre mineros que alcanzó cierta resonancia a nivel nacional), perpetrada por el Ejército el 4 de junio de 1923, reveló brutalmente los límites del reformismo republicano cuando aquellos intereses entraban en juego.

¹⁶ Sobre el impacto de la Gran Depresión en la política boliviana debe consultarse L. WHITEHEAD: "El impacto de la Gran Depresión en Bolivia", *Desarrollo Económico*, 12 (45), 1972, pp. 50-80. La Guerra del Chaco, librada por Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1936 por un territorio que se suponía muy rico en petróleo, liquidó en tres años de sangrientos combates a 65.000 –la cifra no incluye inválidos y heridos– de los 250.000 hombres movilizados de un país con sólo dos millones de habitantes. Véase H. KLEN: *Orígenes de revolución nacional boliviana. La crisis de la generación del Chaco*, Juventud, La Paz, 1987, pp. 211-212.

Con la entrada de las nuevas elites, la lucha política nacional adquirió una dimensión nueva, y se abrieron oportunidades inéditas para los trabajadores, en particular para los mineros, cuyos sufragios tenían en potencia un enorme peso dentro del parlamentarismo de representación restringida. En lo inmediato, pudieron por primera vez canalizar sus demandas y hacer escuchar su “voz” a través de una fuerza de oposición definida y con un programa abiertamente favorable a sus intereses. Así, en las elecciones de 1940 los trabajadores del subsuelo votaron en bloque al Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR),¹⁷ *el primer y último partido marxista de masas de la historia de Bolivia*, que fue adquiriendo rápidamente un fuerte arraigo en las minas. Los militantes del PIR comenzaron a trabajar intensamente en la organización sindical, y cuando el 21 de diciembre de 1942 el ejército oligárquico reprimió brutalmente una manifestación obrera en el campamento de Catavi, provocando una gigantesca masacre,¹⁸ el partido tenía ya una implantación muy sólida entre las bases de los grandes complejos mineros. Y no desaprovechó la oportunidad que le brindó aquella brutal carnicería cometida con hombres, mujeres y niños indefensos, para ampliar su convocatoria, relacionando desde la tribuna parlamentaria aquellos hechos con la ilegitimidad del orden oligárquico. Para los mineros la matanza no fue algo nuevo, dado que sus experiencias sangrientas con el ejército databan de antiguo. Sin embargo, en 1942, por primera vez en la historia de Bolivia y en virtud del nuevo escenario político creado después de la guerra del Chaco, su tragedia adquirió una auténtica resonancia nacional.¹⁹ Todo parecía indicar, por lo tanto, que las elecciones de 1940 y los sucesos de Catavi serían los primeros jalones de una relación cada vez más estrecha entre los sindicatos mineros y el nuevo partido de la izquierda.

La historia, sin embargo, adoptaría de inmediato un curso muy diferente. En cierta medida gracias a las actividades de otro partido de reciente creación, formado por un grupo heterogéneo de intelectuales y políticos nacionalistas inspirados en gran medida por los fascismos europeos, que también supo hacer de la “Masacre de Catavi” una poderosa arma política,²⁰ empleando hábilmente la plataforma parlamentaria para acosar al gobierno con una serie de elocuentes intervenciones. Me refiero, por supuesto, al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que apenas pasaba por entonces de ser una pequeña camarilla de intelectuales filofascistas, pero que iba a desempeñar muy pronto un papel clave en un acontecimiento destinado a marcar un importante punto de inflexión en la dinámica política de la Bolivia contemporánea. Un acontecimiento destinado, para lo que aquí nos interesa, a producir una *ruptura definitiva* en la trayectoria de su movimiento obrero.

El 20 de diciembre de 1943, en efecto, la actividad conspirativa del MNR con un grupo de jóvenes oficiales nacionalistas que integraban la logia RADEPA (Razón de Patria) desembocó en un incruento golpe de Estado que volvió a quebrar el desarrollo del sistema parlamentario y situó al

¹⁷ El candidato del PIR, José Antonio Arze, recibió dos tercios de su votación total en las elecciones presidenciales de 1940 de los departamentos mineros de Oruro y Potosí. De acuerdo a los resultados oficiales, sin duda manipulados a favor del candidato gubernamental, Arze obtuvo 4.716 votos en Potosí y 3.482 en Oruro, frente a los 8.448 y 5.080 de Peñaranda. La importancia decisiva del voto minero puede apreciarse comparando esas cifras con los resultados de las elecciones en la capital, La Paz: aquí Arze obtuvo tan sólo 1.117 votos contra los 19.862 de Peñaranda.

¹⁸ No se conoce exactamente la dimensión de la matanza que se produjo cuando los soldados ametrallaron a la multitudinaria marcha de protesta encabezada, como era costumbre, por las mujeres de los trabajadores del subsuelo. Según LORA (*Historia del movimiento obrero boliviano*, p. 376) las cifras que se han barajado oscilan entre los 40 y los 400; DUNKERLEY (*Rebelión en las venas*, p. 26) da una cifra de 35, mientras KLEIN (*Orígenes de revolución nacional boliviana*, p. 410) cree que hubo “varios centenares” de víctimas mortales.

¹⁹ V. ARTEAGA: *Las banderas de María Barzola. Análisis de la coyuntura de Catavi como un momento de ruptura política*, Tesis de Maestría (mimeo), FLACSO, México, 1984.

²⁰ Lo cierto es que el MNR pudo aprovechar mejor que el PIR las oportunidades para la propaganda política que brindó a las fuerzas opositoras la “Masacre de Catavi”. El PIR, en efecto, fue acusado por el gobierno de instigar el “movimiento subversivo” de Catavi, sus dirigentes no parlamentarios fueron encarcelados o enviados al exilio, sus periódicos fueron clausurados y toda su estructura organizativa sometida a una fuerte presión. En estas condiciones, es muy comprensible que sus parlamentarios decidieran adoptar una actitud más cauta que los del MNR. Véase H. KLEIN: *Orígenes de revolución nacional boliviana*, pp. 411 y ss.

Mayor Gualberto Villarroel a la cabeza de un gobierno que emprendió una política reformista bastante radical. De hecho, fue el primero que se enfrentó seriamente a los intereses estrechos de las grandes compañías mineras. Y los militantes del MNR, que pese a su elitismo y su alejamiento absoluto de las luchas de los trabajadores eran plenamente conscientes de que la capacidad para movilizar o controlar la protesta obrera iba a ser en adelante un recurso político fundamental, supieron aprovechar las oportunidades que les ofrecía su proximidad al poder²¹ para comenzar a vincularse a las organizaciones obreras. El mayor éxito de su política laboral, y el que tuvo mayores consecuencias en el futuro, fue la organización de los sindicatos mineros en una confederación nacional. Bajo su auspicio, en efecto, se creó en 1944 la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que *sería desde entonces el eje articulador del movimiento obrero boliviano*. La primera red organizacional que ligaba a los principales grupos obreros del país de un modo efectivo y duradero quedó así ligada a la acción política del MNR.²² Desde luego, tampoco fue mucho más lo que se hizo entonces por los mineros. Pero por muy restrictivos que puedan parecer ahora algunos aspectos de la legislación laboral de aquel gobierno, parece sensato imaginar que el profundo contraste con el medio altamente represivo en que se había desenvuelto el sindicalismo minero hasta ese momento, en el que era totalmente imposible construir ninguna organización duradera, debió hacer que las bases y los dirigentes mineros apreciaran enormemente (mucho más que cualquier otro grupo obrero) el respiro que les ofrecía la nueva actitud gubernamental.

Pero la figura de Villarroel fue apreciada (y a la postre mitificada hasta unos extremos que hoy se nos antojan absurdos) fundamentalmente por el *contraste* con lo que vino inmediatamente después. Y fue ese contraste el que provocó el hundimiento del PIR, que se había negado a participar en los preparativos golpistas y que fue rechazado cuando exploró la posibilidad de ingresar en el gobierno de Villarroel, quedando así condenado a la oposición frente a un régimen que sería finalmente uno de los más “populares” de la historia de Bolivia. Atrincherado en una acción opositora radical ante lo que había definido (no sin fundamento) como mera expresión del fascismo criollo, el PIR no sólo encabezó a las masas urbanas que lincharon a Villarroel el 21 de julio de 1946, sino que acabó participando, apoyándose en la estrategia frentista diseñada por la Komintern, en el gobierno de reconstrucción oligárquica que sucedió a los militares nacionalistas.²³ Un gobierno que no sólo se alineó de inmediato con los intereses de las grandes compañías del estaño, cerrando al partido marxista la posibilidad de iniciar la política de reformas que le hubiera permitido reforzar su implantación entre los sectores obreros, sino que se embarcó muy pronto en una política abiertamente represiva frente a las organizaciones sindicales de las minas. Así, cuando el 27 de enero de 1947 los soldados dispararon contra los trabajadores de Potosí, cuando la empresa Patiño decidió imponer un despido masivo a sus trabajadores en Catavi-Siglo XX para deshacerse en un solo golpe de todos los activistas sindicales, forzando una intervención del ejército que desembocó en una

²¹ Paz Estenssoro, el principal líder del MNR, fue Ministro de Hacienda, y otros importantes miembros del partido ocuparon otros ministerios y cargos públicos de importancia.

²² Aunque no fue, como pretende James MALLOY (*La revolución inconclusa*, CERES, Cochabamba, 1989, p. 163), la primera Federación de sindicatos mineros. Véase Gustavo RODRÍGUEZ: *El socavón y el sindicato*, p. 106.

²³ Los factores de política internacional son imprescindibles para comprender las decisiones del PIR, pero creo que éstas se guiaron básicamente por los intereses del partido comunista en el escenario político nacional. Entiendo que las recomendaciones del frentismo entonces dominantes en los manuales tácticos de la Komintern simplemente permitieron a los comunistas bolivianos justificar la oposición a las elites nacionalistas que amenazaban con arrebatarles sus clientelas “naturales” definiendo al régimen militar como una expresión peculiar del “fascismo criollo”. Si la jugada resultó a la postre suicida en términos de su relación con el movimiento obrero ello se debió a sus propios errores de cálculo y no a la imposición desde el exterior de una línea táctica ajena a las peculiaridades de la política local. Sin embargo, parece que en otros países latinoamericanos la adopción de la línea de los “frentes antifascistas” guardó menos relación con las exigencias de la dinámica política interna. Para un relato breve —que no incluye el caso boliviano— puede consultarse J. GODIO: *Historia del movimiento obrero latinoamericano*, 3. *Socialdemocracia, Socialcristianismo y Marxismo. 1930-1980*, Nueva Sociedad, Caracas, 1985, pp. 47 ss.

nueva masacre, el PIR tenía a uno de sus militantes ocupando el Ministerio de Trabajo. De este modo, el resultado de su compromiso con los partidos “democráticos” tradicionales fue que perdió casi todo su apoyo en el movimiento laboral, y, lo que es más importante, que el partido marxista *fue repudiado radical y definitivamente por el que estaba destinado a ser su segmento decisivo: el proletariado minero*. La semilla que pareció en algún momento contener el desarrollo de un movimiento obrero “clásico” se había podrido antes de germinar. Y nunca volvería a haber otro PIR.

EL ESPEJISMO DE PULACAYO

En los momentos que siguieron a la caída de Villarroel, con los comunistas del PIR totalmente desacreditados y los “nacionalistas” del MNR en desbandada y sometidos a una aguda represión estatal, los cuadros del Partido Obrero Revolucionario (POR), de orientación trotskista, adquirieron una considerable influencia en la jovencísima Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). El fruto más llamativo del activismo trotskista fue sin duda la famosa Tesis Política aprobada en el Primer Congreso Extraordinario de la FSTMB, celebrado en Pulacayo en noviembre de 1946. Conocido desde entonces como *Tesis de Pulacayo*, el documento, un encomiable esfuerzo por adaptar el “programa de transición” de Trotsky a la realidad del país,²⁴ se debe íntegramente al entonces joven intelectual del POR Guillermo Lora, una de las cabezas mejor dotadas de la Cuarta Internacional. El verbo encendido de su Tesis, que sería ratificada desde entonces en todos los congresos de la FSTMB, expresaba en cierto modo la violencia extrema que había marcado desde el principio las relaciones de los mineros con el Estado.²⁵ Pero entiendo que el radicalismo trotskista triunfó entonces ante todo debido a factores *puramente coyunturales*: la habilidad del pequeño Partido Obrero Revolucionario para aprovechar el vacío organizativo creado por el desprestigio o la desarticulación momentánea de los partidos mayores, y la frustración por el retorno de los odiados políticos de la “oligarquía” tras el hundimiento abrupto de un gobierno nacionalista que había generado muchas expectativas. Un resultado que pudo ser fácilmente atribuido por los ideólogos trotskistas a la traición del “reformismo”, encarnado entonces por los “estalinistas” del PIR.

Entiendo, por lo tanto, que en términos estratégicos la victoria coyuntural de los trotskistas resultó *irrelevante*, y son muchos los que se han llevado a engaño en este punto. De entrada, cabe sospechar que, cualquiera fuese el significado del lenguaje violentamente anti-reformista del programa político aprobado por los delegados mineros en 1946, sus representantes debían haber aprendido en los últimos años a relacionar sus oportunidades para luchar con éxito en defensa de sus intereses de grupo con la naturaleza de la elite gobernante: no parecía lo mismo tener en el gobierno a Villarroel que a los abogados de los “barones” del estaño. A lo mejor me equivoco, pero sólo suponiendo ese *aprendizaje* puedo explicarme el hecho de que inmediatamente después de avalar el lenguaje incen-

²⁴ La Tesis describía a Bolivia como un “país capitalista atrasado”, dotado de una burguesía incapaz de cumplir con sus “objetivos históricos”, socio subordinado del “imperialismo” y los “señores feudales” latifundistas en una alianza perversa amparada por la violencia del “Estado feudal-burgués”, y afirmaba en estas condiciones “solamente los traidores y los imbéciles pueden seguir sosteniendo que el Estado tiene la posibilidad de elevarse por encima de las clases sociales”. Por suerte, “en Bolivia el proletariado se caracteriza por tener suficiente fuerza para realizar sus propios objetivos e incluso los ajenos”, dirigido por un grupo minero capaz de taponar la boca a cualquier reformista con su radicalismo y su “temeraria audacia en la lucha”. La tarea prioritaria era así derrotar definitivamente a los “colaboracionistas de clase”, empeñados en impedir con sus falsas promesas de reformas “la expropiación de los expropiadores”. Tras ello, el horizonte de la revolución proletaria quedaría al alcance de la mano. Véase Guillermo LORA: *Tesis de Pulacayo. Contenido y defensa*, La Paz, s/f (16ª ed.), pp. 48-64.

²⁵ Trifonio Delgado, contemporáneo de los hechos que narra, asegura que los postulados de la tesis no fueron entendidos por nadie en el momento en que fue presentada y aprobada, pero que su lenguaje violento, sin embargo, sí fue entendido y seguramente compartido por casi todos (T. DELGADO: *100 años de lucha obrera en Bolivia*, Isla, La Paz, 1984, pp. 184-186).

diario de los trosquistas, los mineros decidieran seguir el único camino que les quedaba abierto tras el suicidio del PIR para *influir* en la naturaleza de las elites del Estado: establecer una relación cada vez más estrecha con el MNR. Y el MNR consiguió, en efecto, consolidar rápidamente su influencia sobre las organizaciones del trabajo y en particular sobre la joven Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), destinada desde su fundación a ser la organización nuclear del movimiento obrero boliviano.²⁶

Así, el efecto *real* de los acontecimientos que se sucedieron a partir del linchamiento de Villaruel en 1946 no fue en absoluto la marginación del “reformismo”, sino la virtual desaparición del único actor político que podía ofrecer a los sindicatos *una alternativa viable al nacionalismo de clase media* para intervenir en la política nacional. De hecho, fueron los dirigentes obreros *más moderados* los que se vincularon en su momento al programa “reformista” de Villaruel (los activistas del MNR, y no los de cualquier otro partido de la izquierda), quienes reforzaron su posición en aquellos años. De modo que ocurrió exactamente lo contrario de lo que da a entender la imagen, consolidada en el “sentido común” del movimiento popular boliviano y en el trabajo de la mayoría de sus estudiosos, de que el radicalismo minero y la Tesis de Pulacayo *nacieron juntos*, y que el violento anti-reformismo de ésta fue desde entonces “el punto de referencia programático esencial de los mineros bolivianos y por extensión de la clase obrera en su conjunto”.²⁷

LOS LÍMITES DEL POPULISMO BOLIVIANO

Los sindicatos mineros y los activistas del MNR forjaron así la alianza que desembocó en la Revolución de abril de 1952 (la Revolución Nacional). E inmediatamente después del triunfo revolucionario se creó la Central Obrera Boliviana (COB), la primera matriz sindical que ligó de un modo efectivo a todas las organizaciones obreras a nivel nacional. La COB, que fue desde el momento mismo de su fundación un actor central del sistema político boliviano, emergió tras los acontecimientos de la primera década pos-revolucionaria como una institución plenamente consolidada. Tanto la estructura organizativa del sindicalismo boliviano como sus estrategias de acción frente al Estado y los actores políticos quedaron ya claramente perfiladas en este período, y se han mantenido casi inalteradas hasta el día de hoy.²⁸ De modo que el acontecimiento de Abril y sus desarrollos inmediatos señalaron en verdad un “antes” y un “después” en la historia del movimiento obrero.

Pero si en general es cierto que las transformaciones operadas en cualquier coyuntura no surgen de la nada ni eliminan elementos fundamentales de la realidad social preexistente, en el caso de la revolución social boliviana los elementos de *continuidad* tuvieron además una especial relevancia. Seguramente el factor de continuidad más relevante fue que en la Bolivia posrevolucionaria, pese a la intención inicial del MNR, no fue posible promover una auténtica diversificación de la es-

²⁶ Los liderazgos sindicales vinculados al MNR, con Juan Lechín a la cabeza, monopolizaron los cargos de la Federación sindical. En las elecciones presidenciales de 1951, las últimas que se celebrarían antes de la Revolución de abril de 1952, los mineros sufragaron en bloque a favor del candidato nacionalista, Víctor Paz Estenssoro, que obtuvo entonces un triunfo que casi nadie esperaba. Finalmente, cuando el ejército cerró el acceso al poder del líder nacionalista en un nuevo golpe de estado, los trabajadores mineros se convirtieron en el soporte más seguro de la estrategia subversiva que se vio forzado a adoptar desde entonces el MNR, que culminaría en abril de 1952 con el triunfo de la coalición revolucionaria.

²⁷ J. DUNKERLEY: *Rebelión en las venas*, p. 28.

²⁸ Tomando prestada una imagen que Lipset y Rokkan utilizaron para describir el surgimiento de alternativas partidarias estables, podríamos decir que el campo del movimiento obrero boliviano quedó “congelado” a partir de su consolidación orgánica en la década que siguió a la Revolución de Abril. La referencia a la obra de Lipset y Rokkan procede de S. VALENZUELA: “Un marco conceptual para el análisis de la formación del movimiento laboral”, en Comisión de Movimientos Laborales-CLACSO, *El sindicalismo latinoamericano en los ochenta*, Santiago de Chile, 1986, p. 40.

estructura económica. El programa de las elites reformistas, en efecto, se quedó en los papeles,²⁹ aplastado por las realidades de la economía más pobre y aislada de América del Sur, y por un entorno natural especialmente hostil al optimismo desarrollista. No hubo ningún progreso industrial significativo, y las iniciativas para diversificar la canasta de materias primas para la exportación terminaron fracasando por completo.³⁰ Así, la salud de la economía boliviana y las finanzas del estado *continuaron* dependiendo casi por completo de la evolución de la industria minera, que seguiría aportando alrededor del 90% de los ingresos anuales por exportaciones. Y esto tuvo al menos dos consecuencias fundamentales.

En primer lugar, la persistencia del *confinamiento minero* de la economía boliviana después de 1952 condenó a los dirigentes nacionales del movimiento obrero a una dependencia absoluta de los recursos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).³¹ La COB nació inevitablemente como una prolongación de la estructura sindical minera, pero los estrechos límites estructurales que enfrentaron en Bolivia las estrategias industrializadoras y el fracaso de los proyectos de diversificación del sector exportador siguieron anulando después la opción de construir liderazgos obreros alternativos, capaces de equilibrar la hegemonía minera. Así, el solapamiento “de facto” entre la COB y la FSTMB haría que en el futuro *los intereses y las oportunidades de acción de los mineros determinarían por completo las estrategias de la central sindical nacional*, que se consolidó inevitablemente como una *organización minera*.

El segundo hecho crítico es que la gran minería atravesaba desde la Gran Depresión de entre guerras una *crisis secular de productividad* que cerró la posibilidad de que la coalición revolucionaria construyese sobre las minas (nacionalizadas en el mismo año de la Revolución) un modelo de crecimiento monoexportador viable, siquiera en el corto plazo.³² Así, al continuar dependiendo los recursos locales de inversión para el conjunto de la economía de la evolución de los excedentes de un sector minero *en declive*, el juego distributivo entre los actores políticos del Estado y los trabajadores mineros adquirió necesariamente una apariencia de *conflicto puro*. Había demasiado poco que repartir, y la *precariedad del excedente* separó en este punto, y de un modo radical, a los mineros bolivianos y a su principal equivalente en las economías monoexportadoras de América Latina: los trabajadores del petróleo en Venezuela.

²⁹ El espíritu “cepalino” que animaba al proyecto económico original de los movimientistas está bien reflejado en este fragmento del discurso que pronunció Paz Estenssoro ante la Convención nacional de su partido en febrero de 1953: “Tras las realizaciones básicas, vendrá la diversificación de la economía, la liquidación de la monoproducción; no debemos exportar únicamente barrillas, sino vender lingotes fundidos de nuestros minerales; debemos desarrollar las posibilidades de la ganadería y la agricultura que ofrece nuestro país, para disminuir el pasivo de nuestra balanza comercial y no estar más sometidos a la subordinación que representa estar sometidos a la importación de alimentos; debemos desarrollar la industria fabril a fin de pagar altos salarios a los obreros, porque sólo el obrero de la gran industria es mejor remunerado. Así el Estado puede cumplir todos los fines que debe llenar: asistencia sanitaria, escuela para todos, sin tomar en cuenta clase ni edad. Necesitamos vías de comunicación para unir los mercados con las zonas fabriles y realizar todo lo que signifique bienestar y felicidad a que tiene derecho el pueblo boliviano”. Citado en C. LLOBET TABOLARA: “Bolivia: Estado y ficción gubernamental”, en P. G. CASANOVA (coord.): *El Estado en América Latina. Teoría y práctica*, Siglo XXI, México, 1990, p. 332.

³⁰ Es cierto que, dadas las dificultades de partida que enfrentaba en Bolivia la creación de una planta industrial, el MNR enfocó con mucha mayor intensidad su esfuerzo diversificador hacia el desarrollo de nuevos productos primarios de exportación, invirtiendo grandes cantidades de recursos en la agricultura comercial de las tierras tropicales del Oriente y en el impulso a la extracción de petróleo. Pero la primera era una apuesta de largo plazo, enmarcada en una estrategia de integración nacional, que sólo comenzaría a dar frutos —muy limitados— en la década de los setenta. La segunda fue simplemente una mala apuesta, dado que la enorme inversión en la empresa petrolera estatal obtuvo resultados dramáticamente alejados de los previstos.

³¹ La reunión fundacional de la Central Obrera Boliviana (COB) había tenido lugar en los locales de la FSTMB, y el secretario ejecutivo de ésta, el mítico Juan Lechín Oquendo, había sido elegido para ocupar simultáneamente el mismo cargo en la COB.

³² De hecho, en más de una ocasión se ha argumentado que, estando las minas como estaban, su nacionalización tenía que ser necesariamente un pésimo negocio. Ésta es la tesis que sostiene, por ejemplo, el célebre estudio de C. ZONDAG: *La economía boliviana 1952-1964*, Los Amigos del Libro, La Paz/Cochabamba, 1968.

De modo que la crisis de las grandes minas nacionalizadas, producto de un declive productivo heredado de dos décadas de continua descapitalización y del inicio de una fuerte caída en las cotizaciones internacionales del estaño a consecuencia del final de la guerra de Corea, parecían prometer desde el principio que el populismo boliviano no tendría espacio para levantar el vuelo. La combinación de unas organizaciones sindicales independientes, sólidamente asentadas en la estructura comunitaria de los campamentos, que controlaban el centro neurálgico de la economía nacional, con una situación de estancamiento productivo derivado del estrangulamiento del modelo de acumulación monoexportador, amenazaba, en efecto, con desencadenar violentas pugnas distributivas cuando todavía sonaba la música de la “luna de miel” revolucionaria.

LA SEGUNDA “TRAICIÓN” REFORMISTA

En los momentos que siguieron a la Revolución de Abril los sindicatos mineros, que habían tenido una intervención decisiva en la derrota del ejército oligárquico, obtuvieron sin duda concesiones muy importantes. Ante todo, la incorporación de la cláusula del “control obrero con derecho a veto” en el decreto de nacionalización de las grandes minas, dictado el 31 de octubre de 1952, fue una conquista esencial de las organizaciones mineras. Y en aquel breve período de euforia, el MNR pareció ciertamente consolidar su control sobre los sindicatos, hasta el punto de que el Primer Congreso Nacional de la COB, celebrado en octubre de 1954, reconoció la “perfecta identidad de intereses y de sentimiento que actualmente existen entre Gobierno y Pueblo”.³³ De hecho, la “perfecta identidad” aludía a una relación real de colaboración y dependencia mutua entre la central obrera y las elites del estado, que se había institucionalizado ya en la fórmula del *Cogobierno*, consistente en la participación en el gabinete de un número de “ministros obreros” (entre dos y cinco) designados por los sindicatos.³⁴

Pero era fácil ver que por debajo de este aparente idilio existían importantes puntos de conflicto potencial entre el gobierno y los trabajadores. Y el problema real no estaba en que el programa que había aprobado la COB en su primer Congreso incluyera, aparte de la reafirmación del “socialismo” como objetivo estratégico de las luchas obreras, una serie de demandas *políticas* que el gobierno reformista no parecía dispuesto a otorgar.³⁵ No se trataba de que los trabajadores fuesen “socialistas” y el gobierno no, o de que desearan tener una mayor presencia en la toma de decisiones políticas. Se trataba, por el contrario, de que los incentivos que habían recibido los trabajadores mineros habían sido hasta ese momento casi *exclusivamente políticos y simbólicos*: mucho poder político y mucha presencia discursiva, pero ninguna alegría para sus castigados cuerpos.

El aumento del poder de las organizaciones obreras a todos los niveles (la presencia abrumadora de sus milicias armadas, las instituciones del “control obrero” y el “Co-Gobierno”, la invasión del escenario nacional por la simbología y el discurso del nuevo “poder popular”) no se estaba traduciendo, en efecto, en la obtención de ventajas materiales para las bases de los sindicatos. Aunque una vez realizada la nacionalización, la FSTMB logró imponer algunos de sus criterios (el gobierno, por ejemplo, recontrató a un alto coste a los mineros despedidos antes de 1952 y liquidó a la nueva plantilla de la recién creada Corporación Minera Boliviana –COMIBOL– todos los benefi-

³³ *Cartilla* de la COB, citada en J. DUNKERLEY: *Rebelión en las venas*, p. 76.

³⁴ Para el “Co-Gobierno” véase J. LAZARTE: *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. (Historia de la COB: 1952-1987)*, ILDIS, La Paz, 1989, pp. 121 ss.

³⁵ Básicamente, la nacionalización de todo el transporte, la cooperativización masiva de la agricultura, la creación de tribunales revolucionarios populares, el reacondicionamiento total del sistema educativo, y el control obrero con derecho a veto en todas las actividades económicas y no sólo en las minas nacionalizadas. Véase J. DUNKERLEY: *Rebelión en las venas*, pp. 76-77.

cios devengados por los antiguos propietarios),³⁶ los trabajadores habían tenido que aceptar el argumento de que la maltrecha minería pública no estaba por el momento en condiciones de financiar aumentos salariales ni una mejora real en las condiciones de vida y trabajo en las minas.³⁷ De modo que a las comunidades mineras se les pedía ahora resignación y paciencia en nombre de los intereses supremos de la Revolución y de un futuro de mayor prosperidad colectiva. Y es legítimo pensar (yo lo pienso) que de haberse alcanzado un acuerdo entre los principales actores de la Revolución Nacional el futuro hubiese sido realmente mejor para todos. Pero, lamentablemente, no existían las condiciones que hubieran permitido tal vez alcanzarlo. Veamos.

En primer lugar, los gobernantes del MNR no podían esperar mucha colaboración de los sindicatos mineros por motivos de *compromiso*³⁸ o *disciplina* partidaria. Al contrario que el PIR, cuyas actividades habían estado ligadas desde su creación a los sindicatos, el MNR procedía de una tradición completamente ajena a las luchas obreras. Su ideología, marcada por una inquietante ambigüedad, fue siempre profundamente elitista, y los vínculos que estableció con los trabajadores organizados fueron siempre muy laxos y puramente *instrumentales*. El MNR, por decirlo rápido, no era un *partido obrero*, y este hecho inyectó desde el principio fuertes dosis de desconfianza en sus relaciones con los sindicatos.³⁹ De modo que la total ausencia de *certidumbre sobre las intenciones mutuas* en el medio plazo hacía muy difícil que los trabajadores aceptaran sacrificios inmediatos en nombre de los intereses generales y futuros de la Revolución.

Pero, además, y con independencia de cuál fuera la intensidad y el carácter de los vínculos entre sindicato y partido, resulta evidente que la profundidad de la crisis minera hacía muy difícil saber si las reducciones salariales y los programas para “rehabilitar” COMIBOL contenían alguna esperanza de mejora en el futuro o eran tan sólo intentos de extraer en el corto plazo la mayor proporción posible del producto a sus trabajadores sobre la hipótesis, formulada explícitamente por Paz Estenssoro al inicio de su mandato, de que el “ciclo del estaño” se había agotado irremediablemente. ¿Se trataba de exprimir al máximo, día a día, el sudor del trabajador del subsuelo mientras llegaba el esperado colapso definitivo de la gran minería? Si era verdad que aquello estaba condenado a ir muriendo, o si su evolución dependía tan sólo de factores externos impredecibles (auges o descensos coyunturales en los precios del mercado mundial), carecía por completo de sentido cal-

³⁶ Esto supuso que en cuatro años la fuerza laboral de la COMIBOL creciera de 29.000 a 36.000 trabajadores, y que el estado desembolsara 8 millones de dólares en “pago de reposición” como bono de recontractación a sus empleados. J. DUNKERLEY: *Rebelión en las venas*, p. 63.

³⁷ La evolución de los salarios –especialmente de los mineros– durante los primeros cuatro años de gobierno movimientista es desde luego un asunto sobre el que aparentemente no se puede decir nada definitivo. Hay quienes, como ERICSON (*Labor Law and Practice in Bolivia*, Washington, U.S. Department of Labor, D.C., 1962), PFALLER (*Labor Demands and the Politics of Economic Development. A Theoretical Framework and a Comparative Study of Argentina, Bolivia and Cuba*, Ph. Diss., University of Pittsburgh, 1973), KELLY y KLEIN (*Revolution and the Rebirth of Inequality. A Theory Applied to the National Revolution in Bolivia*, University of California Press, California, 1981) o MALLOY (*La revolución inconclusa*, CERES, Cochabamba, 1989), opinan que los mineros obtuvieron ventajas salariales reales en esta primera etapa; otros, como Amado CANELAS (*¿Quiebra de la minería estatal boliviana?*, Los Amigos del Libro, La Paz/Cochabamba, 1981), RUIZ GONZÁLEZ (*La administración empírica de las minas nacionalizadas*, Juventud, La Paz, 1980), Margaret MARTIN (*The Bolivian Mineworkers Federation (FSTMB), 1952-1965: Labour, Politics and Economic Development*, Phd. Diss., Universidad de Portsmouth, 1984) o DUNKERLEY (*Rebelión en las venas*), que mantienen que hubo una caída en el salario real. Lo que puede afirmarse con seguridad es que las condiciones de vida y trabajo en las minas bolivianas apenas variaron nada en todo este período.

³⁸ M. MARTIN (*The Bolivian Mineworkers Federation*, p. 7) piensa que las luchas del “sexenio” (1946-1952) generaron un sentimiento de “identidad común” y fuertes “lazos emocionales” entre los mineros reprimidos por las empresas y los movimientistas reprimidos y masacrados por el estado oligárquico. Tal vez esto tuviera alguna importancia, pero es indudable que no resultaba suficiente para cerrar los abismos que existían entre ambos actores.

³⁹ Por ejemplo, la propuesta de participación formal de los sindicatos en el gobierno fue aprobada tras muchos debates y sólo sobre la base de que constituía el medio más eficaz para garantizar la previsible “claudicación” de los políticos. Véase J. DUNKERLEY: *Rebelión en las venas*, p. 51.

cular las ventajas que se obtendrían más adelante a cambio de las renunciadas presentes. Porque el futuro era *radicalmente incierto*.

De modo que los liderazgos del MNR (en el gobierno o en la cúpula de la COB) no podían contar ni con la lealtad de los mineros (porque no existía) ni con su previsión de futuro (porque éste era radicalmente incierto) para promover un compromiso. Sólo les quedaba entonces recurrir al soborno: *comprar* su aquiescencia. Pero ya he apuntado arriba hasta qué punto eran estrechos los límites del populismo boliviano. Diré ahora algo más: como en el presente se trataba de una economía *verdaderamente pobre*, las partes no sólo tenían poco que repartirse, sino que parecían tener amenazados siempre sus intereses *esenciales*. Los unos (los gobernantes del MNR) tenían sin duda razones para sentir que lo que estaba en juego era la defensa de la unidad social, de la posibilidad misma de obtener los recursos mínimos para construir el nuevo orden político; los otros (los mineros), que luchaban por la supervivencia misma de la colectividad obrera, por el mantenimiento de unos salarios próximos ya al nivel de subsistencia y la defensa de unos empleos sin alternativa. En este contexto, no sólo no fue posible el compromiso, sino que todas las decisiones tendieron inevitablemente a adquirir un espíritu o un carácter *verdaderamente extremista*, y cualquier solución negociada terminó presentándose, tanto para las elites del Estado como para las comunidades mineras, como un resultado más intolerable que la escalada del conflicto. El conflicto abierto prometía al menos la posibilidad de eliminar, o siquiera debilitar de un modo decisivo en algún momento, la resistencia del adversario.

Para completar este cuadro tremendo es necesario anotar que la mezquindad del excedente minero arrojó además a las elites reformistas del MNR en brazos de la cooperación norteamericana, y que ello limitó enormemente su capacidad para “hacer política” con su gente. Entre 1954 y 1964 el país andino fue el mayor receptor individual de la ayuda externa de Estados Unidos en América Latina y el mayor *del mundo* en ayuda per cápita, y aquel “programa mamut” de ayuda financiera norteamericana⁴⁰ indujo en los hechos a los gobernantes de Bolivia a abdicar de su autonomía política. Así, el Programa de Estabilización de 1956, el primer “paquete” importante de medidas económicas dictado por el MNR, que constituyó “un ataque directo a la economía popular establecida después de abril de 1952”,⁴¹ fue redactado en su totalidad por un funcionario del Departamento del Estado. La política de estabilización respondía sin duda a la necesidad objetiva de contener la espiral inflacionaria que se había desatado en los primeros cuatro años del gobierno movimientista encabezado por Paz Estenssoro (1952-1956), pero el presidente Siles Zuazo (1956-1960) no dispuso de margen alguno para negociar sus condiciones, y se vio forzado a emprender una estrategia de confrontación abierta con los sindicatos mineros. Pero también el Plan Triangular para la rehabilitación y relanzamiento de la minería pública, emprendido por Paz Estenssoro en su segundo mandato (1960-1964), fue diseñado por expertos norteamericanos. Y aquel Plan condicionaba rigidamente la ayuda financiera a la puesta en práctica de una serie de medidas que resultaban por completo inaceptables para los trabajadores del subsuelo: la eliminación de los subsidios a los alimentos, el congelamiento de los salarios y una drástica reducción de la plantilla.

La espiral de conflictos que se desarrolló a partir de entonces, marcada por unos niveles de violencia sin precedentes, no sólo bloqueó la aplicación del Plan Triangular para la “racionalización” de la minería pública (como había bloqueado antes el Programa de Estabilización), sino que abrió una brecha definitiva e insuperable entre las dos grandes fuerzas que habían articulado la alianza revolucionaria tan sólo diez años antes. Los comandos del MNR y las milicias sindicales se enfrentaban a tiros en los campamentos, y era inevitable que el XII Congreso Minero, celebrado en diciembre de 1963, declarase a Paz Estenssoro “traidor a los objetivos de la Revolución”, equiparando sin matices a los gobernantes del MNR con aquellos de la odiada “Rosca” oligárquica. De

⁴⁰ J. W. WILKIE: *The Bolivian revolution and US aid since 1952*, Univ. of California Press, Los Angeles, 1969, p. 9.

⁴¹ J. DUNKERLEY: *Rebelión en las venas*, p. 100.

modo que los sindicatos recibieron alborozados el golpe de Estado de Barrientos, que inauguró al año siguiente (noviembre de 1964) la “larga noche” de los gobiernos militares. Tardarían muy poco, sin embargo, en darse cuenta de que el juego no había cambiado. Peor: adquirió una brutalidad sin precedentes. El “disciplinamiento” de la mano de obra, las reducciones en los salarios reales y los despidos previstos por el Plan Triangular para hacer de COMIBOL una empresa rentable serían impuestos a partir de entonces *manu militari*. El ejército ocupó las minas, y en septiembre de 1965 unas doscientas personas murieron en tres días de lucha entre las milicias mineras y los soldados en Catavi, Llallagua y Siglo XX. Dos años más tarde, Barrientos planeó cuidadosamente una nueva intervención militar, que asesinó en la noche del 23 de junio al menos a 87 mineros, incluyendo mujeres y niños, mientras celebraban la entrada del Invierno bailando y bebiendo en las calles de Siglo XX. Fue la “masacre de San Juan”. No fue, por el número de víctimas, la mayor matanza en la violenta historia de los mineros de Bolivia, pero nunca se había visto tanta vesania.

DOS FALACIAS

En los estudios que abordan las relaciones entre los sindicatos y el MNR a lo largo del ciclo de gobiernos civiles de la Revolución Nacional (1952-1964) suele darse una importancia excesiva a las variables político-partidarias, desde dos posiciones que, siendo antagónicas, comparten un trasfondo *idealista* común. El punto de vista más extendido es desde luego que los sindicatos mineros eran “socialistas” o, en cualquier caso, políticamente radicales, antes del triunfo revolucionario, y que su ruptura con los tibios reformistas de clase media agrupados en el tronco central del MNR era por eso mismo un hecho inevitable. Ya he criticado este tipo de razonamiento (que comparten incluso académicos extranjeros completamente ajenos a las tradiciones y tópicos del movimiento obrero boliviano)⁴² al referirme a la interpretación tradicional de la izquierda sobre el significado de la Tesis de Pulacayo, y en el breve espacio de este artículo no cabe abordar el tema con mayor detalle. Sólo añadiré lo siguiente: si fuese verdad que el radicalismo de los sindicatos de Bolivia fue teniendo progresivamente algo (o mucho) que ver con la “conciencia política” de los mineros, este hecho debería entenderse como una *racionalización* de sus experiencias y como una *justificación* de sus luchas, nunca como un dato *a priori*. Si los mineros fueron realmente interiorizando el universo ideológico del marxismo revolucionario lo hicieron a través de un áspero proceso de *aprendizaje*, cuando experimentaron una y otra vez los estrechos límites del reformismo boliviano, y sólo porque el marxismo revolucionario daba *sentido* a sus luchas desesperadas, justificando los fuertes costos de la confrontación con la esperanza de una transformación social y política radical. Se trata, en cualquier caso, de una afirmación sin ningún fundamento empírico, y conviene recordar que los (sin duda muy oscuros) datos existentes parecen apoyar más bien la afirmación contraria; esto es: que los mineros nunca fueron ganados realmente por las percepciones y valores asociados a las diversas ideologías marxistas.⁴³ Pero lo que siempre será falaz es forzar una inversión idealista de los términos del problema, vaciándolo de entrada, y pretender que el “socialismo revolucionario” esta-

⁴² Es el caso, por ejemplo, de James Malloy, autor del mejor estudio disponible sobre la dinámica política del proceso de la revolución nacional, que también hace hincapié en el tópico de que “la gran influencia del POR –trosquista– en la orientación política de Lechín y la FSTMB” había dotado a ésta de una ideología “definida y propia” con anterioridad al triunfo revolucionario. Véase MALLOY: *La revolución inconclusa*, p. 363.

⁴³ El único trabajo empírico que conozco al respecto es el de J. MAGILL (*Labor Unions and Political Socialization: A case study of Bolivian Workers*, Praeger, Nueva York, 1974), que concluye a partir del análisis de los resultados de una encuesta que los mineros estuvieron siempre muy alejados del universo ideológico del marxismo revolucionario. Pero Lawrence WHITEHEAD (“Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia”, *Revista Mexicana de Sociología*, 42 (4), 1980, p. 1478) tiene sin duda buenas razones para afirmar que las pruebas que aporta no son “muy confiables”, algo que por lo demás seguramente ocurre con la mayoría de los estudios que intentan discernir lo que “realmente” piensa la gente.

ba ya allí presente de algún modo en las primeras rondas del juego, de modo que terminó naturalmente desbordando el reformismo de los “licenciados” y las “burocracias”.

La lectura rival de la ruptura entre los sindicatos y el MNR, habitual en los círculos del nacionalismo más moderado, afirma lo contrario: las bases obreras no eran socialistas, ni radicales en ningún sentido, pero sí lo eran en cambio los dirigentes sindicales. Esta tesis se centra también en la crítica de la “burocracia” obrera, pero para destacar la influencia de un “liderismo artificial” afecto a “ideologías alienadas” (el marxismo revolucionario, en este caso), que supuestamente empujó al movimiento hacia una “orientación distribucionista” de corto plazo y provocó con ello la ruptura de una coalición revolucionaria que contenía el germen de un futuro mejor para Bolivia.⁴⁴ Ya he afirmado que es muy fácil compartir la sensación de que al país andino, y en particular a sus mineros (recuérdese a Barrientos), le habría ido mucho mejor si los dos actores que encabezaron la Revolución de 1952 hubieran alcanzado algún tipo de compromiso estable. Pero también es muy sencillo descubrir la *inanidad* de este tipo de lecturas que hacen descansar la explicación del enfrentamiento sobre las percepciones e intereses de los dirigentes obreros, si se tiene en cuenta que los campamentos mineros de Bolivia fueron siempre un terreno particularmente mal abonado para la institucionalización del poder sindical (o, si se prefiere, para el desarrollo de la “burocratización”), y que en ellos la democracia directa comunitaria funcionó desde el principio con una gran eficacia. Porque la cruda realidad es, en efecto, que aquellos liderazgos sindicales de los campamentos mineros de Bolivia a los que el nacionalismo de derechas atribuye la responsabilidad de la radicalización del movimiento obrero, y, por extensión, de las dos décadas siguientes de autoritarismo militar, carecieron siempre de poder institucional, y sólo tuvieron alguna influencia en la medida en que se construyeron un prestigio *personal* ante la comunidad.

Desde luego, los líderes más exitosos podían tener carreras muy prolongadas (es el caso del propio Juan Lechín, secretario ejecutivo de la FSTMB y de la COB desde su fundación hasta 1986, de Federico Escóbar, Mario Torres, Simón Reyes, Armando Morales, y de algunos otros), pero su poder fue en todo momento un resultado de sus atributos personales. Dependía por completo de la admiración de la comunidad hacia su estilo agresivo de liderazgo⁴⁵ o hacia sus niveles excepcionales de compromiso y *sacrificio* en favor del grupo,⁴⁶ y no de su condición de titulares de un rol en alguna institución distinta de la comunidad misma. Ni el hecho de que fueran normalmente los representantes locales de una organización política nacional, ni los cargos para los que habían sido elegidos en la estructura formal del sindicato, añadían en realidad nada a su poder frente a las bases. De modo que los líderes sindicales no parecían estar en condiciones de “manipular” a los mineros. Se trataba más bien de lo contrario: a todos ellos les estaba reservado un destino de esfuerzo personal y de dependencia cotidiana de los humores e inclinaciones de sus representados.

Los autores que defienden la existencia de una sólida “conciencia política” entre las bases mineras no han podido nunca explicar, por ejemplo, la presencia continua al frente del movimiento obrero de Juan Lechín, un viejo caudillo del MNR carente de cualquier ideología precisa. Y quienes hacen descansar la explicación del radicalismo del movimiento obrero boliviano en el análisis de las actitudes y compromisos de los nuevos liderazgos olvidan que en Bolivia éstos no dispusieron nunca de ningún nivel de autonomía frente a las reivindicaciones “auténticas” e inmediatas de las bases. Dado que el poder de la dirigencia de la FSTMB, y por extensión el de la COB, dependía de las decisiones que se tomaban a nivel de la comunidad de base en los campamentos, “bajo la in-

⁴⁴ Son expresiones de un trabajo clásico de Antonio GARCÍA, por lo demás muy interesante (“Los sindicatos en el esquema de la revolución nacional. El sindicalismo en la experiencia boliviana de nacionalización y desarrollo”, *El Trimestre Económico*, 33 (4), 1966, pp. 597-629). La tesis se encuentra presente en todos los autores de la derecha movimientista que elaboran variaciones sobre las miserias de la “burocracia sindical”.

⁴⁵ L. WHITEHEAD: “Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia”, p. 1487.

⁴⁶ G. M. MARTIN: *The Bolivian Mineworkers Federation*, p. 402.

fluencia de asambleas generales abiertas y –a menudo– combativas”,⁴⁷ se desarrolló un vínculo absolutamente *asimétrico* entre la organización nacional y las comunidades de base. Un vínculo en el que los aparatos de gobierno de la Federación nacional minera y la COB eran un mero apéndice (una “correa de transmisión”, diría Lenin) de las preferencias agregadas de las comunidades.

En realidad la democracia directa comunitaria provocó una notable *rigidez* estratégica a la dirección nacional del movimiento, al reducir enormemente su espacio para maniobrar y negociar en el escenario nacional en función de los intereses globales de la organización en las sucesivas coyunturas políticas. Y sólo atendiendo a la asfixiante presión de las bases pueden entenderse los frenéticos virajes tácticos, aparentemente absurdos, que emprendieron los dirigentes obreros durante los años de gobierno del MNR. Por ejemplo, cuando Juan Lechín y el resto de los dirigentes nacionales de la COB y la FSTMB, afiliados al MNR y ligados al gobierno, defendieron con entusiasmo la necesidad de llevar adelante el Plan de Estabilización de 1956, para verse muy poco después obligados a vetarlo. Simplemente, las comunidades mineras se plantaron, y los violentos ataques contra la “ultraizquierda” de los liderazgos obreros nacionales no surtieron efecto alguno. Porque no había ninguna “ultraizquierda” a la que derrotar; porque lo que tenían delante eran las asambleas de unas comunidades que se sentían amenazadas por la política anti-inflacionaria. El mismo vaivén se repitió a finales de 1957, después de que los dirigentes de la COB emitieran una “declaración de unidad”, ratificando su pleno respaldo a la estrategia económica del gobierno. Tardaron muy poco en retroceder, presionados por unas bases mineras que estaban comenzando a sufrir las consecuencias de esa estrategia. Volvieron a hacerlo en 1960, cuando en el plazo de unos meses pasaron de prestar su apoyo pleno al proyecto de rehabilitación de la minería pública a encabezar la violenta resistencia de los mineros frente al Plan Triangular. Es imposible, por lo tanto, dejar de ver que si en ningún momento entre el triunfo de la Revolución Nacional y el golpe de estado militar de 1964 consiguieron los dirigentes obreros sostener acuerdos estables con las elites reformistas del Estado, no fue porque no lo intentaran una y otra vez.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El movimiento obrero boliviano extrajo su fuerza y su radicalismo del confinamiento minero de la economía. Porque el congelamiento de la estructura productiva en un molde particularmente “tradicional” permitió que unas comunidades mineras monolíticas continuaran durante mucho tiempo ocupando el centro neurálgico de la economía nacional, y desempeñando por ello un papel histórico que no tiene paralelo en ningún otro lugar: de ahí la “centralidad obrera” que fue para René Zavaleta la característica principal y distintiva de la dinámica política contemporánea de Bolivia. Porque, dada la escasez de los recursos generados por el modelo monoexportador, el declive productivo de la gran minería, la incertidumbre de futuro, la ausencia de vínculos sólidos entre los sindicatos y los actores políticos del Estado, las comunidades optaron por mantener estrategias de conflicto puro con la esperanza de anular el poder del adversario y obtener *en el presente* una recompensa “justa” por sus esfuerzos. De ahí su radicalismo reivindicativo y la extrema violencia que terminó adquiriendo aquí la lucha de clases.

He criticado sucesivamente las interpretaciones del radicalismo minero que otorgan un lugar central a las variables culturales, y que apuntan ante todo al carácter “andino” de los mineros bolivianos; las lecturas que, desde la izquierda, atribuyen unos niveles *ad hoc* de conciencia de clase a los trabajadores, vaciando así en el inicio el problema que deberían explicar; también los relatos que, desde la derecha, pretenden dar cuenta de la radicalización de los trabajadores a partir de la ac-

⁴⁷ L. WHITEHEAD: “Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia”, p. 1493.

tividad de unos liderazgos alienados por la influencia de “ideologías (marxistas) foráneas”, sin atender al hecho evidente de que aquellos liderazgos carecían de poder institucional en el entorno comunitario de los sindicatos mineros. Finalmente, el asunto es bastante más sencillo, y Sergio Almaraz, sin duda el mejor ensayista de la izquierda boliviana, lo había planteado ya correctamente hace bastante tiempo. Merece la pena citarlo *in extenso*:

[Los mineros] descubrirán que nada le deben al país que no sea su miseria y que ella es la condición que Bolivia retiene para mantener una existencia artificial. Cada vez creen menos en el país y sus hombres, y están curando la primera herida con la pérdida de la esperanza reformista. Esta dolorosa aproximación a la verdad, les revelará la única condición posible de su liberación: la de confiar solamente en sus propias fuerzas. Y entonces será cuando el rencor, actualmente ausente del pecho de las víctimas, les hará decir “nosotros” antes que “la Patria” produciendo el último descubrimiento: el derecho al país propio y al destino elegido. Así el rencor alimentado por la verdad, devastará con las ondas destructoras de la revolución un pequeño mundo donde todo fue mezquino menos el sufrimiento.⁴⁸

Almaraz entendió la agonía minera, y con ella los orígenes del radicalismo revolucionario del movimiento obrero boliviano. Hoy sabemos que se equivocó al esperar que el último capítulo de aquella historia de sufrimiento colectivo sería una “segunda revolución”, ésta definitivamente socialista, que él y tantos otros confiaron en ver hasta mediados de los años 1980.⁴⁹ Confundieron las violentas pugnas distributivas que desencadenaron y sufrieron una y otra vez los mineros, y que hicieron de ellos víctima eterna de tantas “masacres”, con el desarrollo de un movimiento socialista que nunca existió. Era milenarismo. Pero sin duda un milenarismo perfectamente justificable: ¿O acaso todo aquello podía ser para nada?; ¿acaso tanta injusticia y tanto heroísmo no hacían necesario un final feliz?

Hoy conocemos, sin embargo, el carácter agónico y limitado de aquel movimiento obrero. Sabemos también que no han sido, como quería Almaraz, “las ondas destructoras de la revolución”, sino la transformación drástica de la economía-mundo capitalista, lo que ha devastado aquel “pequeño mundo” en el que “todo fue mezquino menos el sufrimiento”. Desde la quiebra final de la gran minería pública en 1985, el hundimiento de las viejas comunidades mineras ha eliminado las estructuras capaces de sostener acciones colectivas prolongadas, de soportar los fuertes costos de la confrontación manteniendo abierta la perspectiva de una transformación social y política radical, y el otrora todopoderoso movimiento obrero boliviano atraviesa una crisis sin precedentes. Pero la historia que he relatado en estas páginas debería servir para desterrar la nostalgia. Porque no hay movimiento socialista que añorar, ni conciencias revolucionarias que despertar. Hay únicamente una historia de miseria y violencia que sólo cabe desear que no vuelva a repetirse.

⁴⁸ S. ALMARAZ: *Réquiem por una república*, Los Amigos del Libro, La Paz/Cochabamba, 1969, pp. 69-70.

⁴⁹ Véase, por ejemplo, J. DUNKERLEY (*Rebelión en las venas*, p. 287), que afirmaba en 1984 que esa revolución era todavía “una posibilidad vital” en Bolivia, en mucha mayor medida que en ningún otro lugar.